



José Joaquín Brunner

PhD, Profesor de la Universidad Diego Portales de Chile y Director de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior. Sociólogo de la educación de nacionalidad chilena ha publicado más de 30 libros sobre educación y cultura, y ha trabajado como consultor de la OCDE, el Banco Mundial y la UNESCO en diversas regiones del mundo.



Disponible en PDF

El futuro de las políticas educativas en América Latina*

Hasta el momento, la expansión de oportunidades educativas en América Latina no logra compensar las desigualdades sociales y culturales. Una nueva agenda de políticas y programas debe incluir educación y cuidado tempranos universales, K-12, que provea a todos de habilidades básicas consistentes con los estándares internacionales y un componente de educación técnica fuerte en el nivel postsecundario adecuado a las necesidades cambiantes del sector productivo.

¿Cuáles objetivos debiesen orientar a los países latinoamericanos en materia de educación a partir del 2015?

Cualesquiera sean deben ir un paso más allá de las metas de *Educación para todos* (EPT), hacia las cuales las sociedades nacionales de la región —y sus diversos grupos internos de clase, etnia, género y localización— han avanzado desigualmente. Se trata de avances disímiles que, a su vez, han sido principalmente de acceso a, participación en, y cobertura cuantitativa de la educación en los niveles preescolar, primario, secundario y terciario. Lo que se requiere ahora es algo más difícil de lograr. Se trata de transformar la experiencia educativa —especialmente la de los niños y jóvenes provenientes de los sectores de menores recursos— en un

*Una primera aproximación a este texto fue publicada en inglés en *Norrag News* N° 49, pp. 61-62.

proceso que por un lado compense las desigualdades de origen socioeconómico y cultural y, por el otro, los prepare para aprender a lo largo de la vida y así poder ejercer roles adultos en un medioambiente caracterizado por el cambio continuo, la inseguridad y la presión productiva.

La expansión de las oportunidades educativas en América Latina no ha servido hasta ahora para compensar las desigualdades de origen socioeconómico y cultural. Si bien es cierto, hoy en día millones de niños y jóvenes antes excluidos de la educación ingresan al proceso formativo K-12 (término que engloba la educación preescolar, primaria y secundaria), en promedio una mitad no lo



completa y la otra mitad sigue trayectorias altamente desiguales desde el punto de vista de la calidad formativa. En efecto, entre quienes completan la educación secundaria —condición para evitar el riesgo de caer bajo la línea de la pobreza en América Latina— en promedio, un 50% no ha logrado a los 15 años el dominio mínimo de las competencias de aprendizaje definidas por la prueba PISA.

Se trata de transformar la experiencia educativa —especialmente la de los niños y jóvenes provenientes de los sectores de menores recursos— en un proceso que por un lado **compense las desigualdades de origen socioeconómico y cultural** y, por el otro, **los prepare para aprender a lo largo de la vida**

En breve, la educación ampliada que se ofrece hoy en la región más que compensar las desigualdades de origen tiende a reproducirlas y con ello a limitar el futuro de la mayoría de los jóvenes. De hecho, solo una fracción de ellos está en condiciones de acceder a la educación terciaria y permanece en este nivel hasta obtener un certificado técnico o profesional.

Por lo mismo, la mayoría de los jóvenes — con educación secundaria de baja calidad o con una escolarización aún menor— no se encuentra lo suficientemente preparada para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, integrarse al mundo del trabajo, asumir sus responsabilidades cívicas y enfrentar las incertidumbres de la vida contemporánea. Como consecuencia sus expectativas de movilidad social, satisfacción de necesidades materiales y culturales, así como sus deseos de aprovechamiento de las oportunidades y bienes de la modernidad, se ven frustradas. Un sordo malestar resulta de estas circunstancias, malestar que igual como ocurre con los volcanes de la cordillera de los Andes, hace erupción cada cierto tiempo tornando inestable el orden político y la convivencia social.

¿Cómo avanzar entonces a partir del 2015 hacia un horizonte educativo más equitativo para la población de niños y jóvenes latinoamericanos?

Primero que todo debería extenderse, hasta universalizarla, la educación preescolar. Junto con esto, debiesen desarrollarse programas de Atención y Educación para la Primera Infancia (AEPI) para los niños y niñas del 60% de los hogares con menores recursos. Estas iniciativas debiesen contar con personal profesional altamente calificado e infraestructura y equipamiento de máxima calidad. Mientras Latinoamérica no logre esta meta, no podrá valerse de la educación como un medio para compensar desigualdades de origen socioeconómico y cultural. Durante los próximos 15 años esta debiese ser la prioridad absoluta de la política pública, la acción del Estado, la inversión pública y la cooperación con los entes privados.

Primero que todo debería extenderse, **hasta universalizarla**, la educación preescolar.

El desafío es transformar la efectividad y calidad de los colegios en una **real palanca para igualar al máximo posible los resultados del aprendizaje.**

2 En seguida, cabe asegurar a todos los niños y jóvenes latinoamericanos un proceso K-12 que ofrezca a todos una experiencia formativa conducente al dominio mínimo necesario de las competencias y destrezas básicas de aprendizaje de acuerdo con el estándar internacional diseñado por PISA. Esto, con independencia de su hogar de origen, clase social, género, etnia o localización. El desafío es transformar la efectividad y calidad de los colegios en una real palanca para igualar al máximo posible los resultados del aprendizaje.

Las dos metas anteriores suponen satisfacer tres requisitos *sine qua non*:

- 3
- (i) que el sistema de educación superior provea a la AEPI y al ciclo K-12 del personal docente y directivo calificado para convertir a los colegios que actualmente tienen un desempeño mediocre o fallido en colegios efectivos capaces de alcanzar los estándares de aprendizaje propuestos;
 - (ii) que los gobiernos, en conjunto con las sociedades civiles a nivel nacional y local, cuenten con programas de apoyo para esos colegios que necesitan transformarse, y
 - (iii) que el gasto público destinado a la educación en América Latina sea utilizado prioritariamente y con fuertes exigencias de rendición de cuentas para cumplir con los objetivos señalados anteriormente. Esta idea apunta a revertir la situación actual en la que una proporción de los recursos se destina a los dos quintiles de mayores ingresos, con un fuerte efecto regresivo.



4 Por último, además de mejorar drásticamente la formación del personal docente y directivo para los demás niveles del sistema educacional es imprescindible revisar las políticas y metas de la educación terciaria, con el propósito de cumplir los siguientes tres objetivos:

(i) Desarrollar fuertemente la Educación Técnica y Formación Profesional (ETFP) en conexión con las cambiantes necesidades del sector productivo y con su activa participación y colaboración.

De esta manera se busca reducir la presión que existe sobre la demanda por carreras profesionales de base académica, larga duración y alto costo.

(ii) Garantizar la mayor disponibilidad de información posible para orientar la elección de los jóvenes al momento de ingresar a la educación terciaria. Esta propuesta se orienta a reducir las altas tasas

de deserción, la frustración de expectativas, el derroche de recursos públicos y privados, y el potencial fraude que acarrear consigo mercados poco transparentes y con fuertes asimetrías de información.

(iii) Fomentar activamente la investigación educacional tanto con recursos del Estado como por medio de la cooperación internacional.

El trabajo debiese orientarse tanto hacia la solución de problemas del sistema de AEPI, escolar y terciario, como hacia la innovación pedagógica, de forma tal que las políticas públicas cuenten con evidencia sobre la cual apoyarse los docentes, con medios de conocimiento para mejorar sus prácticas y las sociedades nacionales con información y argumentos que les permitan deliberar y decidir sobre los cursos más propicios para la acción educacional. **RM**